

EXPEDIENTE: TJA/1ªS/174/2021

ACTORA:

AUTORIDAD DEMANDADA:

Directora General y representante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos¹ y otras.

TERCERO INTERESADO:

No existe.

PONENTE:

Mario Gómez López, Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

Ma. del Carmen Morales Villanueva.

CONTENIDO:

Antecedentes -----	3
Consideraciones Jurídicas -----	5
Competencia -----	5
Precisión y existencia del acto impugnado -----	5
Causas de improcedencia y de sobreseimiento-----	8
Análisis de la controversia-----	15
Litis -----	15
Razones de impugnación -----	16
Análisis de fondo -----	16
Pretensiones -----	38
Consecuencias de la sentencia -----	42
Parte dispositiva -----	44

Cuernavaca, Morelos a siete de septiembre del dos mil veintidós.

Resolución definitiva dictada en los autos del expediente número TJA/1ªS/174/2021.

¹Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda consultable a hoja 56 a 65 del proceso.

Síntesis. La parte actora impugnó el acuerdo del 25 de agosto de 2021, emitido en el expediente S/N-DG/01/21, por la autoridad demandada Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el que con fundamento en los artículos 57 y 56, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, resolvió desechar el recurso de revocación que promovió la parte actora en contra de la orden de suspensión de suministro 00567542 de fecha 26 de julio de 2021, emitida por el Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Se declara la nulidad del acuerdo impugnado por existir violaciones procesales. Se ordena a la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, emita un acuerdo dentro el plazo de setenta y dos horas en el que se tenga por recibido el escrito presentado por la parte actora, debiendo ordenar remitirlo a la autoridad que emitió la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, esto es, al DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. Se ordena al DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, emitir un acuerdo dentro del plazo de setenta y dos horas en el que prevenga a la parte actora para que, dentro del plazo de tres días hábiles, adecue su recurso a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro del plazo, se tendrá por no interpuesto su escrito inicial, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; una vez subsanada la prevención en su caso, deberá emitir el acuerdo de admisión, en el que resolverá lo relativo al desechamiento y admisión de las pruebas que acompañó, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; deberá señalar fecha y hora, dentro de los diez días hábiles siguientes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la que deberá ser notificada de manera personal y con

una anticipación de tres días hábiles por lo menos, a la fecha en que deba celebrarse la audiencia, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; concederá un plazo de cinco días hábiles para que formule alegatos, conforme al artículo 59, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; citará a las partes para oír resolución definitiva, la que deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la citación, conforme al artículo 59, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

Antecedentes.

1. [REDACTED] presentó demanda el 28 de septiembre del 2021, se admitió el 13 de octubre de 2021.

Señaló como autoridades demandadas:

- a) DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.
- b) [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS².
- c) [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE JEFE SECCIÓN "B" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS³.

Como actos impugnados:

- I. *"Se impugna mediante el presente Juicio de Nulidad el auto de fecha 25 de agosto de 2021, dictado por la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del*

²Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda consultable a hoja 88 a 105 del proceso.

³Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda consultable a hoja 70 a 86 del proceso.

Municipio de Cuernavaca, en el que se resolvió desechar el recurso interpuesto en contra de la ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el C. [REDACTED] supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. Obdulio "N".

- II. *En consecuencia, también se impugna la ilegal ORDEN DE SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el [REDACTED] supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. [REDACTED] "N", por medio de la cual se pretende afectar mi derecho humano de acceso al agua que es protegido por nuestra Constitución Federal." (Sic)*

Como pretensión:

"1) Solicito a este H. Tribunal reconozca la procedencia del presente juicio de Nulidad y declare la nulidad lisa y llana y de pleno derecho del acto de autoridad impugnado en el capítulo respectivo y consistente en: El auto de fecha 25 de agosto de 2021, dictado por la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se resolvió desechar el recurso interpuesto en contra de la ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el [REDACTED] supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. Obdulio "N".

2) En consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas dejar sin efectos la orden de suspensión referida, así como también deje sin efectos el adeudo de \$18,846.60 (Dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 60/100 moneda nacional que contiene". (Sic)

2. Las autoridades demandadas, comparecieron a juicio dando contestación a la demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó la vista dada con las

contestaciones de demanda, ni amplió su demanda.

4. El juicio de nulidad se llevó en todas sus etapas. Por acuerdo de fecha 16 de febrero de 2022 se proveyó en relación a las pruebas de las partes. En la audiencia de Ley del 28 de marzo de 2022, quedó el expediente en estado de resolución.

Consideraciones Jurídicas.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos es competente para conocer y fallar la presente controversia en términos de lo dispuesto por los artículos 116 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3 fracción IX, 4 fracción III, 16, 18 inciso B), fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 1, 3, 7, 38, fracción I, 85, 86, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Precisión y existencia del acto impugnado.

6. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos impugnados en el escrito de demanda, resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de lo dispuesto por los artículos por los artículos 42, fracción IV, y 86, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e interpreta en su integridad la demanda de nulidad⁴, sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su ilegalidad⁵; así mismo, se

⁴ Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XI, abril de 2000. Pág. 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.

⁵ Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 18 Tercera Parte. Pág. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.

analizan los documentos que anexó a su demanda⁶ a fin de poder determinar con precisión el acto que impugna la parte actora.

7. La parte actora en el escrito de demandada señaló como actos impugnados:

- I. *"Se impugna mediante el presente Juicio de Nulidad el auto de fecha 25 de agosto de 2021, dictado por la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se resolvió desechar el recurso interpuesto en contra de la ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el C. [REDACTED], supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. [REDACTED] "N".*
- II. *En consecuencia, también se impugna la ilegal ORDEN DE SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el C. [REDACTED], supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. [REDACTED] "N", por medio de la cual se pretende afectar mi derecho humano de acceso al agua que es protegido por nuestra Constitución Federal." (Sic)*

8. Sin embargo, este Tribunal analizará el primer acto impugnado, toda vez que el segundo acto impugnado consistente en la orden de suspensión de suministro 00567542 de fecha 26 de julio de 2021, consultable a hoja 25 del proceso, fue emitida por el Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a través del cual le notificó a la parte actora que conforme a lo dispuesto por los artículos 4, fracción V y 100, de la Ley Estatal del Agua Potable, se procede a la suspensión del suministro de agua potable porque cuenta con bimestres vencidos; se encuentran sub judice a lo que se resuelva este Tribunal en relación al primer acto impugnado consistente en el acuerdo del

⁶ Novena Época. Registro: 178475. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XVII.2o.C.T. J/6. Página: 1265. DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

25 de agosto de 2021, emitido en el expediente S/N-DG/01/21 por la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en razón de que la parte actora en el recurso de revocación que desechó la autoridad demandada, impugnó la referida orden de suspensión de suministro.

9. Por lo que se procederá al análisis del **primer acto impugnado**, consistente en:

- I. *"Se impugna mediante el presente Juicio de Nulidad el auto de fecha 25 de agosto de 2021, dictado por la Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se resolvió desechar el recurso interpuesto en contra de la ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO, supuestamente emitida por el C. [REDACTED], supuestamente en su carácter de Director Comercial, acto administrativo identificado con el número 00567542, de fecha 26 de julio del 2021, y ejecutada el día 28 de julio del 2021, por el C. [REDACTED] "N".*

10. Su existencia se acredita con el acuerdo del 25 de agosto de 2021, emitido en el expediente S/N-DG/01/21 consultable a hoja 20 a 24 del proceso⁷, en la que consta que lo emitió la autoridad demandada Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en los artículos 57 y 56, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, resolvió desechar el recurso de revocación que promovió la parte actora en contra de la orden de suspensión de suministro 00567542 de fecha 26 de julio de 2021, emitida por el Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por lo siguiente motivos:

A) La parte actora no acreditó la personalidad jurídica, toda vez que, en los registros en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en relación

⁷ Documental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el artículo 491 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, al no haberla impugnado, ni objetado ninguna de las partes en términos del artículo 60 de la Ley de la materia.

al medidor número 980067542, se encuentra identificado como usuario a [REDACTED]

B) Que, el acto reclamado no infiere en la esfera jurídica de los derechos de la parte actora, porque no acredita con ninguna documental ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual que produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica.

C) Porque el acto impugnado no fue emitido, omitido, ordenado o ejecutado por esa autoridad, además de que no cuenta con las facultades y atribuciones para realizar esa actuación, como se desprende del artículo 11, del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el cual dispone las atribuciones del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Por lo que, al no tener el carácter de autoridad ordenadora o ejecutora del acto, desechó el recurso con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción II, 37, fracción XVI y 38, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

D) Que resulta inaplicable el estudio del recurso de revocación por no encontrarse dentro de la normatividad aplicable en la entidad, porque es aplicable en materia fiscal, y que se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Federación.

E) Porque la parte actora incumplió lo dispuesto por el artículo 56, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.

Causas de improcedencia y sobreseimiento.

11. Con fundamento en los artículos 37, último párrafo, 38 y 89 primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, este Tribunal analiza de oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de orden público, y de estudio preferente; sin que por el hecho de

que esta autoridad haya admitido la demanda se vea obligada a analizar el fondo del asunto, si de autos se desprende que existen causas de improcedencia que se actualicen.

12. Las autoridades demandadas [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS y [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE JEFE SECCIÓN "B" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, hicieron valer las mismas causales de improcedencia que establece el artículo 37, fracciones X y XVI, esta última en relación con los artículos 1, 4 y 12, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

13. La primera y segunda causal de improcedencia que hacen valer, prevista por el artículo 37, fracciones X y XVI, esta última en relación con los artículos 1 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, **son inatendibles**, porque este Tribunal determina en relación a esas autoridades, se actualiza la tercera causal de improcedencia que hicieron valer, prevista en la fracción XVI, del artículo 37, en relación con el artículo 12, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respecto del acto impugnado, por lo que cualquiera que fuera resultado del análisis de esas causales no cambiaría el sentido de la resolución.

Sirve de orientación el siguiente criterio jurisprudencial:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución⁸.

⁸ TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 497/92. Sociedad Cooperativa de Autotransportes de la Sierra Nahuatl de Zongolica, Veracruz, S.C.L. 28

14. Se actualiza la citada causal de improcedencia por cuanto a las autoridades demandadas [REDACTED] **EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS y [REDACTED], EN SU CARÁCTER DE JEFE SECCIÓN "B" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.**

15. La Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 18, inciso B), fracción II, establece que el Pleno de este Tribunal es competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión o resolución de carácter administrativo o fiscal, que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales en perjuicio de los particulares.

16. El artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establece que son partes en el juicio, los demandados, teniendo este carácter, la autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, o a la que se le atribuya el silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan.

17. De la instrumental de actuaciones tenemos que el acto impugnado precisado en el párrafo 9. de esta sentencia, lo emitió la autoridad demandada **DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS**, como se determinó en el párrafo 10. de la presente sentencia.

de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez. Amparo en revisión 289/92. Joel Gómez Yáñez. 2 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Adela Muro Lezama. Octava Época, Tomo X-Octubre, pág. 293. No. Registro: 216,878. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XI, Marzo de 1993. Tesis: Página: 233

18. No basta que la actora atribuya su emisión a todas las autoridades demandadas, porque para ello es necesario que esas autoridades hubieran emitido, ordenado se emitiera o ejecutaran el acto impugnado, circunstancia que no acontece, ni fue demostrada por la actora con prueba fehaciente e idónea, ya que debe entenderse como autoridad emisora del acto, a aquélla que suscribe la resolución o el acto impugnado.

19. En esas consideraciones debe sobreseerse el presente juicio de nulidad, en relación a las autoridades demandadas precisadas en el párrafo **14.** de la presente sentencia, porque no emitieron el acto impugnado, ya que debe entenderse como autoridad emisora del acto, a aquélla que suscribe, ordena o ejecuta la resolución o el acto de autoridad impugnado.

Sirve de orientación, la siguiente tesis jurisprudencial que se transcribe:

SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de

Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo T4, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento⁹.

20. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos¹⁰, se decreta el sobreseimiento en relación a las autoridades precisadas en el párrafo **14.** de esta sentencia, al no tener el carácter de autoridades ordenadoras o ejecutoras del acto impugnado.

21. La autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, hace valer las causales de improcedencia que establece el artículo 37, fracciones X y XVI, esta última en relación con los artículos 1, 4 y 12, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

22. En relación a la primera causal de improcedencia, argumenta que ha transcurrido en exceso el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que fue notificado el acto impugnado, **lo que resulta infundado.**

23. La parte actora en el apartado de fecha de conocimiento del acto manifestó conocerlo, el día 31 de agosto de 2021.

24. Lo que no fue controvertido por las autoridades demandadas, por lo que debe tenerse como fecha de conocimiento del acto impugnado el que manifestó la parte actora.

25. El plazo de quince días para promover la demanda comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquel en que surtió

⁹ QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época, Registro: 177141, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.P. J/3, Página: 1363.

¹⁰ Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

II.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley.

efectos la notificación del acuerdo impugnado, como lo establece el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos¹¹.

26. Se le notificó el acuerdo impugnado el martes 31 de agosto de 2021, por lo que la notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, es decir, miércoles 01 de septiembre 2021, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, último párrafo, de la Ley de la materia¹².

27. Por tanto, el plazo de quince días comenzó a transcurrir el día siguiente al que surtió efectos la notificación del acto impugnado, esto es, el jueves 02 de septiembre de 2021, feneciendo el día miércoles 29 de septiembre del mismo año, no computándose los días 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre de 2021; por tratarse respectivamente de los días sábados y domingos, por lo que no corrieron los términos y plazos como lo dispone el artículo 35¹³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ni el día 08, 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2021, por haberse suspendido las labores para este Tribunal.

28. Atendiendo a la fecha de presentación de la demanda el 28 de septiembre de 2021, es incuestionable que fue presentada dentro del plazo de quince días que señala el artículo 40, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por lo que no consintió de forma tácita, ni de forma expresa el acto impugnado.

29. La autoridad demandada en relación a la **segunda causal de improcedencia** prevista por el artículo 37, fracción XVI, en

¹¹ "Artículo 36. Los plazos se contarán por días hábiles, empezarán a correr el día hábil siguiente a aquel en que surtan efectos la notificación, ya sea que se practiquen personalmente, por oficio, por lista o por correo electrónico; y serán improrrogables y se incluirá en ellos el día de su vencimiento.

[...]"

¹² "Artículo 27.- [...]

Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día siguiente en que se practican".

¹³ Artículo 35.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios todos los días del año, excepto los sábados y domingos, el primero de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el diez de abril, el uno y cinco de mayo, el dieciséis y treinta de septiembre, el uno, dos y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el uno de diciembre de cada seis años, cuando tome posesión de su cargo el titular del Poder Ejecutivo Federal, el veinticinco de diciembre y aquellos días en que el Tribunal suspenda las labores.

relación con los artículos 1º y 4º, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la sustenta en el sentido de que la parte actora no controvierte el acto impugnado que se le atribuye al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, ni motiva y funda la causa de nulidad por la cual quede plenamente demostrado la ilegalidad del acto impugnado.

30. Como se observa sus manifestaciones están vinculadas con el fondo del acto impugnado, razón por la cual no se analizará en este apartado si es legal o no, si no al resolver el fondo del acto impugnado.

Es orientadora la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse¹⁴.

31. La autoridad demandada en relación a la tercera **causa de improcedencia** que hace valer, prevista por el artículo 37, fracción XVI, en relación con el artículo 12, fracción II, inciso a), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, argumenta que es improcedente el acto porque dice no fue emitido, omitido u ordenado por esa autoridad, por lo que no cuenta con el carácter de ordenadora, ejecutora del acto impugnado.

32. Es infundada, porque que el acto impugnado fue emitido por la autoridad demandada Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, como se determinó en el párrafo **10.** de esta sentencia.

¹⁴ Novena Época, Registro: 187973, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5.

33. Este Tribunal de oficio en términos del artículo 37, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos¹⁵, determina que no se actualiza ninguna causal de improcedencia por la cual se pueda sobreseer el juicio.

Análisis de la controversia.

34. Se procede al estudio del acto impugnado que se precisó en el párrafo 9. de esta sentencia, el cual aquí se evoca como si a la letra se insertara.

Litis.

35. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 86, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la **litis** del presente juicio se constriñe a determinar la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados.

36. En la República Mexicana, así como en el Estado de Morelos, los actos de autoridad gozan de **presunción de legalidad**, esto en términos del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del **principio de legalidad**, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general.¹⁶

37. Por lo tanto, **la carga de la prueba le corresponde a la parte actora**. Esto adminiculado a lo dispuesto por el artículo 386

¹⁵ Artículo 37.- [...]

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio respectivo

¹⁶ Época: Décima Época. Registro: 2005766. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) Página: 2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL."

del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación complementaria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que establece, en la parte que interesa, que la parte que afirme tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal.

Razones de impugnación.

38. Las razones de impugnación que manifestó la parte actora, pueden ser consultadas a hoja 08 a 17 del proceso.

39. Las cuales no se transcriben de forma literal, pues el deber formal y material de exponer los argumentos legales que sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones efectivamente planteadas, que respectivamente establecen los artículos 85, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 105, 106 y 504 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación complementaria al juicio de nulidad, no depende de la inserción material de los aspectos que forman la litis, sino de su adecuado análisis.

Análisis de fondo.

40. La parte actora en la **primera razón de impugnación** manifiesta como **primer motivo de inconformidad** que el acuerdo impugnado resulta infundado e inmotivado, porque el actuar de la autoridad demandada contraviene lo dispuesto por los artículos 1, 5, fracción VIII, 8, último párrafo, 13, 40, párrafos tercero y cuarto; 95 del Código Fiscal del Estado de Morelos, en relación con el artículo 101, de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, y artículo 1, último párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.

41. Que la autoridad desecha el recurso de revocación, porque a su parecer no cuenta con personalidad jurídica para promoverlo y concluye que carece de interés legítimo o jurídico para haber presentado el recurso, que el hecho de haber exhibido el original

de la orden de suspensión de suministro emitida en su contra no es suficiente para probar que tiene interés jurídico o legítimo en el asunto, lo que considera es incorrecto por que la orden de suspensión de suministro emitida en su contra, aparece su nombre, domicilio, su número de contrato, por tanto, afecta su esfera jurídica y tiene derecho a impugnarlo.

42. La autoridad demandada como defensa a la razón de impugnación manifiesta que es inoperante por insuficiente, porque no vierte algún razonamiento jurídico en el cual se desprenda la ausencia de alguno de los elementos de existencia o de validez de los actos administrativos que impugna.

43. La razón de impugnación de la parte actora **es fundada**, como se explica.

44. La orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, emitida por Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, que impugnó la parte actora en el recurso de revocación que promovió; que se pude consultar a hoja 25 del proceso, es al tenor de lo siguiente:



ORDEN DE SUSPENSION
DE SUMINISTRO

Orden:00567542

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
Av. Morelos Sur No. 166, Colonia Centro, CP 62000, Cuernavaca, Morelos, Teléfono: (777) 362-3900

FECHA EJECUCION: 26/07/2021

EMISION: 26/07/2021

Nombre: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]
Contrato: 89850
Bimestres de Adeudo: 5
Pagares Vencidos: 0

Tipo/Giro: DH/001
Convenio Vencido:\$0.00

Sector Ruta: 1510
Folio: 2965
Medidor: 98006381
Saldo Recibo: \$17,938.00
Saldo Total:\$18,846.60

Con fundamento en la ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos notificamos a usted, que se procede conforme al Art. 100 Art. 4 Fracc. V, a la SUSPENSION del suministro de agua potable ya que a la fecha cuenta con Bimestres Vencidos.

ASI MISMO LE COMUNICAMOS QUE PASE A NUESTRAS OFICINAS AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS.

ATENTAMENTE


Jorge Adrian Ruiz Duran
Director Comercial

SUSPENSION	CONDICIONES DEL PREDIO	CONDICION DEL MEDIDOR	EJECUTO
<input type="checkbox"/> Nivel Medidor	<input type="checkbox"/> Habitado	<input type="checkbox"/> Empotrado	1.-
<input type="checkbox"/> Nivel Banqueta	<input type="checkbox"/> Deshabitado	<input checked="" type="checkbox"/> Dentro del Predio S/B	2.-
<input type="checkbox"/> Nivel Linea	<input type="checkbox"/> Terreno Baldío	<input type="checkbox"/> Reconectado / Multa	HORA: 11:40
<input type="checkbox"/> Se Localiza Susp.	<input checked="" type="checkbox"/> Predio Cerrado	<input type="checkbox"/> NO Localizada	MOVIL: 11:40

" 2022, Año de Ricardo Flores Magón"

45. De su contenido se desprende que va dirigida a la parte actora [REDACTED] a través del cual le notifica que conforme a lo dispuesto por los artículos 4, fracción V y 100, de la Ley Estatal del Agua Potable, se procedería a la suspensión del suministro de agua potable porque cuenta con bimestres vencidos.

46. Por lo que se determina que el acto impugnado afecta la esfera jurídica de la parte actora, porque le causa perjuicio, entendiéndose por tal, la ofensa que lleva a cabo la autoridad administrativa sea estatal o municipal, a través de su actuación que, sobre los derechos o intereses de una persona, esto es así, porque la orden de suspensión de suministro referida le ocasiona perjuicio, al pretender la autoridad demandada llevar a cabo la suspensión del derecho humano de acceso al suministro de agua potable, que se encuentra previsto en el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 4.- [...]

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

47. De ahí que se determina que contrario a lo que determinó la autoridad demandada, la parte actora cuenta con interés jurídico para impugnar la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, por tanto, no era dable que la parte actora acreditara la personalidad conforme a lo dispuesto por el artículo 56, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, que establece:

"ARTÍCULO 56.- Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes documentos:

I.- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del promovente, cuando actúe a nombre de otro o de persona moral; [...].”

48. Como lo determinó la autoridad demandada en el acuerdo impugnado, en razón de que no está promoviendo el recurso a nombre de otra persona, sino a su nombre, cuenta habida que la orden de suspensión de suministro se encuentra dirigida a su nombre, por tanto, sufre una afectación de manera directa en su esfera jurídica al emitirse esa orden.

49. En consecuencia, se determina que los motivos en que se sustentó la autoridad demandada para desechar el recurso que promovió la parte actora, consistentes en:

A) La parte actora no acreditó la personalidad jurídica, toda vez que, en los registros en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en relación al medidor número 980067542 identificado se encuentra como usuario a [REDACTED]

B) Que, el acto reclamado no infiere en la esfera jurídica de los derechos de la parte actora, porque no acredita con ninguna documental ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual que produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica.

E) Porque la parte actora incumplió lo dispuesto por el artículo 56, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.

50. No resultan aplicables, porque la parte actora con la orden de suspensión de suministro que impugnó, acredita el interés jurídico para impugnarla.

51. Al emitirse la orden referida a nombre de la parte actora no era necesario que acreditara la personalidad, como lo dispone el artículo 56, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

52. La parte actora en **la primera razón de impugnación** manifiesta como **segundo motivo de inconformidad** que la autoridad demandada se funda en los artículos 56 y 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, lo que dice es incorrecto, porque el artículo 1º, de ese ordenamiento, señala que no es aplicable a la materia fiscal. Que, el artículo 5, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, señala que la Ley Estatal del Agua es un ordenamiento fiscal, por lo que la autoridad demandada funda el acuerdo impugnado en una Ley inaplicable, lo que genera la ilegalidad del acuerdo impugnado.

53. La autoridad demandada sostuvo la legalidad del acuerdo impugnado.

54. La razón de impugnación **es infundada**, porque la parte actora en el recurso de revocación que promovió, impugnó la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 125, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, que señala:

*"ARTÍCULO *125.- Contra las resoluciones y actos de las autoridades estatales o municipales y los organismos operadores que causen agravio a los particulares, procederá la impugnación, en términos de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos."*

55. Debió impugnarla conforme a lo que establece ese ordenamiento legal, y no a través del recurso de revocación como lo determinó la autoridad demandada en el acuerdo impugnado, no obstante, que el artículo 5, fracción VIII, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, señale que la Ley Estatal del Agua Potable del Estado de Morelos, es un ordenamiento fiscal, al tenor de lo siguiente:

"Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos fiscales del estado de Morelos:

[...]

VIII.- La Ley Estatal de Agua Potable;

[...].”

56. En razón, de que el artículo 219, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, señala los actos que se pueden controvertir, a través del recurso de revocación, como sigue:

“Artículo 219. El recurso de revocación procederá contra:

I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado que:

*a) Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, o
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley, y*

II. Los actos de las autoridades fiscales del Estado que:

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 47 de este Código;

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a lo establecido en este Código;

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 221 de este Código, y

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 193 de este Código.”

57. Hipótesis que no se actualizan, porque la parte actora no controvierte una resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal.

58. El artículo 8, párrafo segundo, del ordenamiento antes citado, señala las autoridades fiscales, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 8. [...]

Son autoridades fiscales para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscales vigentes:

I. En el Estado:

a) El Gobernador;

b) La Secretaría;

c) La Procuraduría Fiscal, y

d) El personal adscrito a las unidades administrativas de la Secretaría encargadas de la administración de contribuciones y

la aplicación de las facultades derivadas de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia hacendaria.

Las autoridades señaladas en el presente apartado, tendrán competencia en todo el territorio del estado de Morelos.

II. En los municipios:

a) La Presidencia de los municipios;

b) Las Regidurías municipales en el ramo de hacienda, y

c) Las Tesorerías municipales, en materia de recaudación y fiscalización.

Las autoridades señaladas en este apartado tendrán competencia en todo el territorio del municipio que corresponda.

Los Organismos Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, que tengan derecho a cobrar algún tipo de ingreso de los establecidos en el Capítulo II del presente Título.

[...].”

59. De lo que se obtiene que el Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, que emitió la orden que impugna, no es una autoridad fiscal.

60. Además, la parte actora en el escrito inicial de demanda no manifiesta que impugnara el crédito fiscal, esto es un adeudo o cargo, para lo cual si resultaría procedente su impugnación a través del recurso de revocación que establece el Código Fiscal para el Estado de Morelos, sino refiere haber impugnado la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021.

61. En la orden de suspensión de suministro impugnada que se citó en el párrafo **44.** de esta sentencia, no se le está exigiendo a la parte actora el pago de un crédito fiscal, esto es, el adeudo o cargo¹⁷, caso contrario se le notifica que conforme a lo dispuesto por los artículos 4, fracción V y 100, de la Ley Estatal del Agua Potable, se procede a la suspensión del suministro de agua potable porque cuenta con bimestres vencidos; además se precisan que existen 5 bimestres adeudados y el saldo total que

¹⁷ Conforme a lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 101, de la Ley Estatal del Agua, los adeudos o cargos de los usuarios tienen el carácter de créditos fiscales y estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución, al tenor de lo siguiente:

“ARTÍCULO 101.- Los adeudos o cargos de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales y por tanto, estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución.
[...].”

asciende a la cantidad de \$18,846.60 (dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.), sin requerir el pago de esa cantidad.

62. Tampoco se acredita en el proceso con prueba fehaciente e idónea que la orden impugnada se emitió en el procedimiento administrativo de ejecución, ni tampoco se alegó que no está ajustado a lo establecido en el Código referido; ni que afecte el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 221, de ese Código; ni determina el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 193 de ese Código.

63. Razón por la cual no es procedente que la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, se impugne a través del recurso de revocación que establece el Código Fiscal para el estado de Morelos, como lo determinó la autoridad demandada en el acuerdo impugnado.

64. No obstante, lo anterior, atendiendo a la tutela judicial efectiva y en aras de una pronta administración de justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁸, que consiste en el derecho de toda persona a acceder a órganos que realizan actos materialmente jurisdiccionales, con la finalidad de que resulten sus pretensiones, de forma pronta, completa, imparcial y gratuita.

65. Y lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus

¹⁸ ***“Artículo 17...***

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]”.

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

66. La autoridad demandada debió prevenir a la parte actora para que, dentro del plazo de tres días hábiles, aclarara su escrito por el cual promovió recurso de revocación, conforme a lo dispuesto por el artículo 57, último párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, que establece:

“ARTÍCULO 57.- [...]

Cuando la autoridad notare alguna omisión o irregularidad en el escrito inicial, prevendrá al promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, subsane o dé cumplimiento a las irregularidades encontradas, apercibido de que de no hacerlo dentro del plazo antes señalado, se tendrá por no interpuesto su escrito inicial. Sólo en el caso de que la omisión del particular sea respecto de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 55 de esta Ley, la autoridad, de oficio, deberá suplir la omisión. Subsana la prevención o acordado favorable el escrito inicial, el procedimiento administrativo continuará su curso, debiéndose resolver en el auto de admisión lo relativo al desechamiento y admisión de las pruebas que se acompañen, de conformidad con las reglas que al efecto se establecen en la presente Ley, debiéndose señalar además fecha y hora, dentro de los diez días hábiles siguientes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, lo que deberá ser notificado de manera personal y con una anticipación de tres días hábiles por lo menos, a la fecha en que deba celebrarse la audiencia.

[...].”

67. Lo que no aconteció, por lo que es ilegalidad el acuerdo impugnado, al no respetarse el derecho humano de debido proceso, previsto por el artículo 14, segundo párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 57, último párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, al existir una violación procesal en perjuicio del actor.

68. La parte actora en la **primera razón de impugnación** manifiesta como **tercer motivo de inconformidad** que la autoridad demandada desecha el recurso que promovió porque la orden que impugnó no lo emitió, toda vez que fue emitida por la Directora Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el cual es subordinado de la autoridad demandada, por lo que al observar eso, se le debió prevenir para que corrigiera su escrito de conformidad con el artículo 40, párrafo quinto, del Código Fiscal para el Estado de Morelos.

69. La autoridad demandada como defensa a la razón de impugnación sostuvo la legalidad del acuerdo impugnado.

70. La razón de impugnación de la parte actora **es fundada** atendiendo a la causa de pedir; a que la parte actora da los hechos y a este Tribunal le corresponde aplicar el derecho; además de que se debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los particulares, como lo dispone el artículo 18, inciso B), fracción II, inciso k), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos:

*“Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno:
[...]
B) Competencias:
[...]
II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de:
[...]
k) En caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, **suplir la deficiencia de la queja;**
[...].”*

71. El artículo 54, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, señala que el procedimiento se iniciará

a instancia de parte agraviada mediante la presentación de un escrito inicial ante la autoridad emisora del acto administrativo que se impugne, al tenor de lo siguiente:

***"ARTÍCULO 54.-** El procedimiento se iniciará a instancia de parte agraviada mediante la presentación de un escrito inicial ante la autoridad emisora del acto administrativo que se impugne, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la notificación o a aquella en que se haya tenido conocimiento del acto."*

72. Por lo que la parte actora debió presentar la demanda ante la autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, que fue la que emitió la orden de suspensión de suministro que impugna la parte actora, por tanto, la autoridad demandada DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, atendiendo a la tutela judicial efectiva y en aras de una pronta administración de justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió emitir un acuerdo en el que se acordara el acuse de recibo del escrito y ordenar remitirlo al DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, para que diera trámite al recurso conforme a los artículos 55 a 100 Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, que establecen las formalidades del procedimiento que se deben seguir cuando se promueva el procedimiento administrativo solicitando la nulidad de un acto administrativo, al tenor de lo siguiente:

***"ARTÍCULO 54.-** El procedimiento se iniciará a instancia de parte agraviada mediante la presentación de un escrito inicial ante la autoridad emisora del acto administrativo que se impugne, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la notificación o a aquella en que se haya tenido conocimiento del acto."*

***ARTÍCULO 55.-** El escrito inicial deberá contener lo siguiente:*

- I.- La autoridad a quien se dirige;
- II.- La mención de que se promueve el procedimiento administrativo;
- III.- El nombre del promovente o del apoderado o representante legal y carácter con que se promueve, domicilio para recibir notificaciones y el nombre de las personas autorizadas para tal efecto;
- IV.- El nombre y domicilio del tercero afectado, o la expresión de que no existe o se ignora su existencia;
- V.- Los hechos en que el promovente funde su petición de manera clara y concisa;
- VI.- Los fundamentos legales que motiven su petición;
- VII.- El acto o actos administrativos que se impugnen; y
- VIII.- La fecha del escrito y la firma del promovente.

ARTÍCULO 56.- Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes documentos:

- I.- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del promovente, cuando actúe a nombre de otro o de persona moral;
- II.- La constancia de notificación en que conste el acto que da origen al procedimiento administrativo o en su caso, la mención bajo protesta de decir verdad, que no existió constancia de notificación;
- III.- Las pruebas respectivas, debiendo acompañarse de todos los medios necesarios para su desahogo; y
- IV.- Copias simples del escrito inicial y documentos anexos para cada una de las partes.

ARTÍCULO 57.- La autoridad dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción del escrito inicial del procedimiento administrativo, resolverá sobre su admisión o desechamiento, debiendo fundar y motivar, en todo caso, su determinación.

Procede el desechamiento del escrito inicial cuando se presente fuera del plazo establecido en el artículo 54 de esta Ley, ó cuando se dejen de acompañar los documentos a que se refiere el artículo 56 del presente ordenamiento.

Cuando la autoridad notare alguna omisión o irregularidad en el escrito inicial, prevendrá al promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, subsane o dé cumplimiento a las irregularidades encontradas, apercibido de que de no hacerlo dentro del plazo antes señalado, se tendrá por no interpuesto su escrito inicial. Sólo en el caso de que la omisión del particular sea respecto de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 55 de esta Ley, la autoridad, de oficio, deberá suplir la omisión. Subsana la prevención o acordado favorable el escrito inicial, el

procedimiento administrativo continuará su curso, debiéndose resolver en el auto de admisión lo relativo al desechamiento y admisión de las pruebas que se acompañen, de conformidad con las reglas que al efecto se establecen en la presente Ley, debiéndose señalar además fecha y hora, dentro de los diez días hábiles siguientes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, lo que deberá ser notificado de manera personal y con una anticipación de tres días hábiles por lo menos, a la fecha en que deba celebrarse la audiencia.

ARTÍCULO 58.- *La audiencia de pruebas y alegatos se celebrará concurran o no las partes y se iniciará con el desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, dejándose a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora, dentro de los diez días siguientes, para desahogar aquellas que no se encuentren debidamente preparadas por causas que no sean imputables a las partes.*

En el procedimiento administrativo se admitirán toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y las que sean contrarias a la moral, al derecho, a las buenas costumbres y a las leyes de orden público.

ARTÍCULO 59.- *Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá a las partes un plazo de cinco días hábiles para que formulen alegatos. Transcurrido dicho plazo, se formulen o no los alegatos, la autoridad citará a las partes para oír resolución definitiva, la que deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la citación.*

ARTÍCULO 60.- *Los efectos de la citación para resolución definitiva son los siguientes:*

- I.- Suspender el impulso procesal de las partes, excepto cuando se promueva la recusación;*
- II.- Impedir que se promuevan cuestiones incidentales; y*
- III.- Obligar a la autoridad a emitir la resolución definitiva que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes.*

ARTÍCULO 61.- *Pondrá fin al procedimiento administrativo:*

- I.- La resolución definitiva;*
- II.- El desistimiento, que podrá ser interpuesto en cualquier momento del procedimiento en tanto no se dicte la resolución definitiva. Si el desistimiento ocurre cuando aún no se hubiere notificado a las demás partes del inicio del procedimiento administrativo, la autoridad podrá decretarlo válidamente sin*

mayores trámites. Si el desistimiento ocurre cuando las partes en el procedimiento se encuentren debidamente notificadas de la iniciación del mismo, se requerirá, para poder decretar el desistimiento, de la conformidad de todas ellas;

III.- La renuncia del derecho en que se funde la solicitud, cuando la misma no se encuentre prohibida por la Ley;

IV.- La caducidad, misma que procederá a petición de parte cuando se deje de actuar en el procedimiento por más de dos meses por cualquier causa;

V.- La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y,

VI.- El convenio celebrado entre las partes, siempre y cuando no sea contrario a las disposiciones jurídicas ni versen sobre materias que no sean susceptibles de transacción.

ARTÍCULO 62.- *La autoridad administrativa podrá valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento para conocer la verdad de los hechos. Cuando se trate de tercero ajeno al asunto que se ventila, se procurará armonizar el interés de la justicia con el respeto que merecen los derechos del tercero.*

ARTÍCULO 63.- *Las autoridades administrativas podrán decretar en cualquier tiempo, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria que sea necesaria para el esclarecimiento de la verdad de los hechos siempre que no lesionen los derechos de las personas y procuren la igualdad de las partes.*

ARTÍCULO 64.- *Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos cuando sea requerida por la autoridad, apercibida de que en caso de negativa se le aplicará la sanción que la autoridad estime conveniente.*

ARTÍCULO 65.- *Sólo los hechos controvertidos o dudosos serán materia de prueba. El derecho lo será únicamente cuando se funde en usos o costumbres o se apoye en leyes o jurisprudencias extranjeras, siempre que de estas dos últimas esté comprometida su existencia o aplicación.*

ARTÍCULO 66.- *Son improcedentes y podrán ser desechadas de plano por las autoridades administrativas, las pruebas que se ofrezcan:*

- I.- Para demostrar hechos que no son materia de la contienda o que no fueron alegados por las partes;*
- II.- Para evidenciar hechos admitidos por las partes;*
- III.- Para demostrar hechos que suponen una presunción legal absoluta;*
- IV.- Para dilatar o entorpecer el procedimiento;*
- V.- Estando prohibidas de manera expresa por esta Ley; y*
- VI.- Sin observar las formalidades de Ley.*

ARTÍCULO 67.- *Las partes tendrán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que afirme tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones de hecho.*

ARTÍCULO 68.- *Las pruebas deberán ofrecerse relacionándolas con los hechos que se tratan de probar. Si no se hace relación de las pruebas en forma precisa con los hechos que se tratan de acreditar, serán desechadas. El ofrecimiento se hará cumpliendo con los requisitos que señale la presente Ley para cada uno de los distintos medios de prueba.*

ARTÍCULO 69.- *Las pruebas deberán prepararse con toda oportunidad, de tal manera que puedan ser desahogadas en la fecha que se señale para la audiencia de pruebas y alegatos; para ello, la autoridad deberá:*

- I.- Citar a los testigos bajo los apercibimientos que se señalan en la presente Ley;*
- II.- Requerir las copias, documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos por las partes, ordenando las compulsas que fueren necesarias;*
- III.- Dar las facilidades necesarias a los peritos para allegarse de los elementos que le sean necesarios para la emisión oportuna de su dictamen;*
- IV.- Designar a los servidores públicos que habrán de practicar las notificaciones, citaciones y las diligencias necesarias para el desahogo eficaz de las pruebas; y*
- V.- Girar los oficios para recabar los informes de autoridad ofrecidos y admitidos como prueba.*

ARTÍCULO 70.- *La prueba documental deberá ofrecerse presentándose en original, o señalando el lugar o archivo en que se encuentra, de tal manera que la autoridad pueda allegarse de este medio de prueba cuando no pueda hacerlo de manera directa el particular.*

Si los documentos estuvieren redactados en idioma extranjero, se acompañará su traducción.

ARTÍCULO 71.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación se encuentre encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones. Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el procedimiento, sin necesidad de legalización.

ARTÍCULO 72.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones establecidas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 73.- Los documentos públicos que se presenten se tendrán por legítimos y eficaces, excepto cuando se impugne expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, en cuyo caso, se decretará su cotejo con los archivos y protocolos existentes, debiéndose constituir el servidor público que al efecto designe la autoridad que conozca del asunto, en el archivo donde se halle el documento a inspeccionar, en presencia de las partes si concurren, debiéndose señalar previamente, el día y la hora en que deba llevarse a cabo.

ARTÍCULO 74.- Los documentos privados procedentes de una de las partes, presentados en vía de prueba y no objetados por las demás partes, se tendrán por admitidos y surtirán plenamente sus efectos como si hubiesen sido reconocidos expresamente.

ARTÍCULO 75.- Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se les notifique su admisión. Los documentos que se exhiban con posterioridad podrán ser objetados en igual lapso contando desde la notificación de la resolución que ordene su recepción.

ARTÍCULO 76.- La prueba documental se desahoga por su propia y especial naturaleza.

ARTÍCULO 77.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte. Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica, o arte sobre el cual deba versar su dictamen. Si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar que se encuentren autorizados conforme a la Ley para su ejercicio.

ARTÍCULO 78.- La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, los puntos y las cuestiones que deba dictaminar el perito.

ARTÍCULO 79.- Las demás partes en el procedimiento, dentro de los tres días siguientes de notificación de la resolución que ordene la admisión de la prueba pericial ofrecida por alguna o algunas de las partes, podrán proponer nuevos puntos o cuestiones sobre los que deba versar este medio de prueba; dentro de ese mismo plazo y si lo consideran conveniente, podrán a su vez, nombrar peritos de su parte, pero si no lo hicieren o el designado no acepta el cargo o deja de rendir su dictamen en la audiencia de pruebas y alegatos, la prueba pericial se perfeccionará con el solo dictamen del perito que ocurra.

ARTÍCULO 80.- Una vez admitida la prueba pericial, quedará a cargo de las partes la presentación de su respectivo perito ante la autoridad que conoce del asunto, para que acepte y proteste el cargo conferido, de tal manera que se encuentre en aptitud de rendir su dictamen pericial el día y hora en que deba celebrarse la audiencia.

ARTÍCULO 81.- Los honorarios de los peritos correrán a cargo de la parte que los designe, excepto cuando se trate del perito tercero en discordia, cuyos honorarios correrán a prorrata a cargo de todas las partes.

ARTÍCULO 82.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las normas siguientes:

I.- En el lugar, día y hora que se señale para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, el perito deberá presentar su dictamen por escrito y ratificar el mismo ante la autoridad administrativa correspondiente;

II.- El dictamen fundamentará, de la manera más idónea, sus conclusiones, que podrán acompañarse con planos, dibujos, fotografías, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo; así mismo deberá ser firmado por el perito quien protestará haber cumplido su cometido en forma leal, de buena fe y con conocimiento de causa;

III.- El perito que dejare de concurrir sin causa justificada a la audiencia, será responsable de los daños y perjuicios que se causen por su incumplimiento. En este caso, la prueba se desahogará y se perfeccionará con el dictamen del perito que concurra;

IV.- Las partes y la autoridad, podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes en relación al dictamen rendido; y

V.- En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la autoridad tendrá la obligación de designar un perito tercero en discordia, quien deberá rendir su dictamen a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que acepte el cargo conferido.

ARTÍCULO 83.- *Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos. Las circunstancias de parentesco, amistad, odio, amor o gratitud de los testigos hacia las partes, que pudieran afectar la parcialidad del testimonio, deberán hacerse constar en el acta respectiva y ser valoradas por la autoridad al emitir la resolución definitiva.*

ARTÍCULO 84.- *La prueba testimonial se ofrecerá indicando los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la autoridad desde el momento mismo de su ofrecimiento, que los cite, señalando las causas o motivos que le hagan imposible su presentación, asimismo deberán precisarse los hechos sobre los cuales cada uno de los testigos o todos en su conjunto deban declarar, ofreciéndose para tal efecto, el interrogatorio respectivo debidamente firmado por el oferente, la falta de firma hará inadmisibile la prueba testimonial.*

ARTÍCULO 85.- *Podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada uno de los hechos que se trate de probar. Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar donde se tramita el procedimiento administrativo, deberán ser presentados, en todo caso, personalmente por el oferente.*

ARTÍCULO 86.- *Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se notifique la admisión de la prueba testimonial, podrán a su vez, las demás partes proponer otras personas que declaren acerca de los mismos hechos, debiendo cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 84 de la presente Ley.*

ARTÍCULO 87.- *Los interrogatorios que deban practicarse a los testigos deberán estar formulados en términos claros y precisos, procurando que en una sola pregunta no se contenga más de un hecho, debiendo tener relación con los hechos controvertidos y no ser contrarias a la moral ni al derecho.*

ARTÍCULO 88.- Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio de la autoridad podrá rendir su declaración por escrito, observándose las reglas de la prueba testimonial en cuanto sean aplicables. En este caso, la autoridad administrativa deberá enviar a la brevedad posible, copia del interrogatorio a la autoridad que deba declarar, apercibiéndola de que en caso de que no rinda su testimonio a más tardar el día que se señale para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, se tendrán por contestadas en sentido afirmativo y bajo su responsabilidad, las preguntas que se le formulen.

ARTÍCULO 89.- Para el desahogo de la prueba testimonial se observarán las siguientes reglas:

I.- El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, excepto cuando se trate del caso a que se refiere el artículo 84 de la presente Ley. Los testigos deberán identificarse plenamente ante la autoridad en el momento de la audiencia;

II.- La autoridad procederá a calificar los interrogatorios procurando que se cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en el artículo 87 de esta ley.

III.- Los testigos deberán ser examinados por separado en el orden en que fueron ofrecidos, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros; para tal efecto, la autoridad designará el lugar en que deban permanecer los testigos hasta la conclusión de la diligencia;

IV.- La autoridad deberá tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad, advirtiéndole de las penas en que incurrirán los que declaran con falsedad ante una autoridad;

V.- El testigo interrogado debe contestar de manera personal y sin tener a la mano apuntes o notas ya preparadas, a menos que se trate de anotaciones relativas a nombres, cifras o datos difíciles de retener a simple memoria;

VI.- En caso de que el testigo deje de contestar a algún punto, incurra en contradicción, se exprese con ambigüedad, o exista la sospecha fundada de que no ha dicho la verdad, pueden las partes solicitar a la autoridad, exija al testigo las aclaraciones oportunas y si es necesario, le aplique una sanción;

VII.- Concluido el interrogatorio al testigo y si las partes lo consideran conveniente, podrán hacer las repreguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en cuyo caso, la autoridad deberá calificarlas observando las mismas reglas para el caso de los interrogatorios;

VIII.- Las preguntas y respuestas se harán constar en el acta respectiva, escribiéndose textualmente unas y otras;

IX.- El testigo deberá dar la razón de su dicho y, en caso contrario, la autoridad deberá exigirla; y

X.- El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen y al calce del final de las hojas que la contengan, si no sabe o no puede leer o firmar la declaración, le será leída por la autoridad e imprimirá su huella digital. Hecho lo anterior, no podrá variarse su declaración ni en la sustancia ni en la redacción.

ARTÍCULO 90.- *Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será designado por la autoridad, debiendo protestar su fiel desempeño. En este caso, además de asentarse la declaración en castellano, se recibirá la declaración escrita en el idioma del testigo.*

ARTÍCULO 91.- *Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba testimonial para su apreciación por la autoridad. Cuando se objetare de falso un testigo, la autoridad administrativa podrá, dentro de los tres días siguientes recibir las pruebas que tenga en su favor el objetante, las que deberán desahogarse en un término no mayor a cinco días, mismas que serán valoradas al dictarse la resolución definitiva.*

ARTÍCULO 92.- *El testigo que deje de concurrir a la audiencia, sin causa justificada, a pesar de encontrarse debidamente notificado, se hará acreedor a la sanción que para tal efecto imponga la autoridad administrativa y deberá ser presentado por conducto de la fuerza pública el día que se señale, para recibir su testimonio.*

ARTÍCULO 93.- *Un solo testigo podrá formar convicción si en él concurren circunstancias que le hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si se trata del único que se dio cuenta de los hechos, si su declaración no se encuentra en oposición con otras pruebas rendidas y si concurren en él circunstancias que sean garantía de veracidad.*

ARTÍCULO 94.- *Las partes podrán solicitar, en vía de prueba, que se libre oficio a los titulares de las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, a fin de que informen sobre algún hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o de que hayan tenido conocimiento en razón de la función que desempeñen y que tenga relación con los hechos controvertidos.*

ARTÍCULO 95.- *El informe de autoridad se ofrecerá precisando el titular de la dependencia o entidad de la administración pública que tenga conocimiento o que pueda aportar los elementos y datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, debiéndose insertar las preguntas que habrán de contestarse por la autoridad requerida.*

ARTÍCULO 96.- *Las autoridades requeridas estarán obligadas a contestar proporcionando la información y datos de que tengan conocimiento, a más tardar el día que se señale para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Si la autoridad no rinde el informe dentro del plazo antes señalado, incurrirá en responsabilidad y se le impondrá la sanción que la autoridad administrativa estime pertinente.*

ARTÍCULO 97.- *La inspección ocular se ofrecerá determinando con precisión los puntos sobre los que debe versar, el lugar donde deba practicarse, los períodos que abarcará, los objetos y documentos que deberán ser examinados y su relación con los hechos controvertidos.*

ARTÍCULO 98.- *La inspección ocular se desahogará por el servidor público que al efecto designe la autoridad que conozca del procedimiento administrativo, quien deberá limitarse a desahogar los puntos materia de la prueba y, en su caso, a requerir le sean puestos a la vista los documentos u objetos que deban inspeccionarse, apercibiendo a las partes que los tengan en su poder de que en caso de no exhibirlos se tendrán por ciertos, presuntamente, los hechos que se tratan de probar. Si los documentos u objetos obran en poder de un tercero ajeno al procedimiento administrativo, se le requerirá para que los exhiba, apercibiéndole que en caso de desobediencia o resistencia, se le impondrá una multa a juicio de la autoridad.*

ARTÍCULO 99.- *La inspección ocular deberá desahogarse el mismo día que se señale para la audiencia de pruebas y alegatos, pudiendo concurrir las partes y sus apoderados, quienes podrán formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes. De la diligencia se levantará acta circunstanciada que deberá firmarse por todos los que en ella intervengan.*

ARTÍCULO 100.- *La autoridad deberá valorar las pruebas de manera individual y en su conjunto con las demás rendidas en el procedimiento, atendiendo a los principios de la legalidad, de la lógica y de la experiencia.*

Las pruebas opuestas se valorarán confrontándolas unas con otras, a efecto de que por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, la autoridad administrativa llegue a una convicción. En todo caso, la autoridad administrativa deberá exponer en los considerados y en los puntos resolutivos cuidadosamente, las motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión."

73. De ahí que se determina que no resulta aplicable el tercer motivo en que sustentó la autoridad demandada para desechar el recurso que promovió la parte actora, que consistió en:

C) Porque el acto impugnado no fue emitido, omitido, ordenado o ejecutado por esa autoridad, además de que no cuenta con las facultades y atribuciones para realizar esa actuación, como se desprende del artículo 11, del Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el cual dispone las atribuciones del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Por lo que, al no tener el carácter de autoridad ordenadora o ejecutora del acto, desechó el recurso con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción II, 37, fracción XVI y 38, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

74. Lo que genera la ilegalidad del acuerdo impugnado.

75. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 4, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que señala: "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: ... II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso", se declara la **NULIDAD del acuerdo del 25 de agosto de 2021, emitido en el expediente S/N-DG/01/21 por la autoridad demandada Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.**

Pretensiones.

76. La primera pretensión de la parte actora precisada en el párrafo 1.1), es improcedente, en cuanto solicita la nulidad lisa y llana del acuerdo impugnado, al resultar fundadas violaciones al procedimiento, por lo que la autoridad demandada deberá purgar tales vicios en la nueva resolución que emita, a quien no se le puede impedir que lo haga.

77. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado.

78. La ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta que se ha calificado en la práctica jurisdiccional como lisa y llana que puede deberse a vicios de fondo, de forma o de procedimiento, o incluso, por falta de competencia, según sea la causa por la que el acto impugnado carezca de todo valor jurídico y por ello queda nulificado; y la nulidad para efectos en la que la autoridad administrativa, en algunos casos se encuentra obligada a revocar la resolución y emitir otra en la que subsanen las irregularidades formales o procesales que provocaron su nulidad.

79. La nulidad relativa ocurre normalmente en los casos en que la resolución impugnada se emitió al resolver una petición lo que ocurre en el caso. Si se violó el procedimiento, la resolución debe anularse, pero ello tendrá que ser para el efecto de que se subsane la irregularidad procesal y se emita una nueva. Igual ocurre cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la falta de fundamentación y motivación provoca su nulidad, que carezca de todo valor jurídico, y la autoridad vinculada a emitir una decisión deberá dictar una nueva resolución fundada y motivada corrigiendo el defecto que tenía la resolución anterior y por el que se anuló.

80. Por lo que toca a la nulidad lisa y llana o absoluta, existe una coincidencia con la nulidad para efectos, a saber: la

aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento.

81. Sin embargo, también existen diferencias, según sea la causa de anulación. Si se consideró que la resolución o el acto impugnado debía nulificarse por provenir de un procedimiento viciado, por adolecer de vicios formales, o por carecer de competencia, en principio, pues puede existir algún otro impedimento que no derive de la sentencia, existirá la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad.

82. La diferencia con la nulidad para efectos es muy clara: en la nulidad absoluta o lisa y llana la resolución o acto que da nulificado y la autoridad no está obligada a emitir una nueva resolución. Habrá ocasiones en que existan los impedimentos aludidos como que no exista autoridad competente, que no existan fundamentos y motivos que puedan sustentarla o que se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente, no obstante que hubieran existido fundamentos y motivos. Solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto, es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre el problema o problemas de fondo debatidos.

83. Pretender que una nulidad absoluta o lisa y llana originadas en vicios de procedimiento y forma, considerando que ya decidieron definitivamente el debate y no es posible que se dicte una nueva resolución, es inaceptable, puesto que en estos casos no se juzgó sobre el fondo y ello significa que no puede existir cosa juzgada al respecto.

Sirven de orientación las tesis que a continuación se transcriben:

**SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE
FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO,**

CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como "desvío de poder", la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades,

subsana las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.¹⁹

NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. Ahora bien, la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso administrativo; si se violó el procedimiento la resolución debe anularse, la autoridad quedará vinculada a subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a dictar una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya

¹⁹ Novena Época. No. Registro: 194664. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. **Jurisprudencia.** Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Febrero de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: VIII.2o. J/24. Página: 455. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos²⁰.

84. La **segunda pretensión** de la parte actora precisada en el párrafo **1.2)**. de esta sentencia, **es improcedente**, en cuanto solicita se deje sin efectos la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021 y se deje sin efectos el adeudo por la cantidad de \$18,846.60 (dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.), porque al haberse decretado fundadas las violaciones procesales; constituyen vicios subsanables, que se conoce como vicio de nulidad relativa, lo que impide a este Tribunal el estudio de fondo sobre la orden de suspensión de suministro y el adeudo, pues será la autoridad competente para conocer el recurso que promovió, atendiendo a los lineamientos que se fijen más adelante, resuelva lo que proceda en relación a la orden de suspensión de suministro y el adeudo, purgando los vicios procesales, a quien no se le puede impedir que lo haga

Consecuencias de la sentencia.

85. La autoridad demandada **DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS:**

A) Dentro de las SETENTA Y DOS HORAS deberá emitir un acuerdo en el que se tenga por recibido el escrito presentado por la actora, debiendo ordenar remitirlo a la autoridad que emitió la orden de suspensión de suministro 00567542 del 26 de julio de 2021, esto es, al DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento

²⁰ Contradicción de tesis 15/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

Novena Época. Registro: 170684. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Diciembre de 2007,

Materia(s): Administrativa. Tesis: P. XXXIV/2007. Página: 26.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número XXXIV/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Administrativo para el Estado de Morelos.

86. La autoridad demandada DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS:

A) Dentro de las SETENTA Y DOS HORAS deberá emitir un acuerdo en el que prevenga a la parte actora para que, dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles, adecue su recurso a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro del plazo, se tendrá por no interpuesto su escrito inicial, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

B) Una vez subsanada la prevención deberá emitir el acuerdo de admisión, en el que resolverá lo relativo al desechamiento y admisión de las pruebas que acompañó, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

C) Señalar fecha y hora, dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la que deberá ser notificada de manera personal y con una anticipación de TRES DÍAS hábiles por lo menos, a la fecha en que deba celebrarse la audiencia, conforme al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

D) Concederá un plazo de CINCO DÍAS hábiles para que formule alegatos, conforme al artículo 59, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

E) citará a las partes para oír resolución definitiva, la que deberá emitirse dentro de los QUINCE DÍAS hábiles siguientes a la fecha de la citación, conforme al artículo 59, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

87. Cumplimiento que deberán hacer las autoridades demandadas en el plazo improrrogable de **TREINTA Y NUEVE DÍAS HÁBILES** contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución e informar dentro del mismo plazo su cumplimiento a la Primera Sala de este Tribunal, considerando los plazos que señalan los artículos 57 y 59, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se procederá en su contra conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

88. A dicho cumplimiento están sujetas las autoridades administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta resolución.

Ilustra lo anterior, la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.²¹

Parte dispositiva.

89. Se decreta el sobreseimiento del juicio en relación a las autoridades demandadas [REDACTED] **EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS y [REDACTED]**

²¹ No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57/2007, Página: 144. Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril de dos mil siete.

EN SU CARÁCTER DE JEFE SECCIÓN "B" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

90. La parte actora demostró la ilegalidad del acto impugnado, por lo que se declara su **nulidad**.

91. Se condenan a las autoridades demandadas precisadas en el párrafo **85. y 86.** de esta sentencia, y aun a las que no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en el cumplimiento de esta resolución, a cumplir con los párrafos del **85. al 87.** de esta sentencia.

Notifíquese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos por los Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Licenciado en Derecho MARIO GÓMEZ LÓPEZ, Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción²² y ponente en este asunto; Magistrado Licenciado en Derecho GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado Doctor en Derecho JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado en Derecho MANUEL GARCÍA QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

²² En término de los artículos 70, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos; 97, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al acuerdo número PTJA/23/2022, aprobado en Sesión Extraordinaria número trece de fecha veintiuno de junio del dos mil veintidós

LIC. EN D. MARIO GÓMEZ LÓPEZ
SECRETARIO HABILITADO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE
LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN.

MAGISTRADO

LIC. EN D. GUILLERMO ARROYO CRUZ
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

DR. EN D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

LIC. EN D. MANUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

La Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que la presente hoja de firmas, corresponde a la resolución del expediente número **TJA/1ºS/174/2021** relativo al juicio administrativo, promovido por [REDACTED] en contra del DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS Y OTRAS, misma que fue aprobada en pleno del siete de septiembre del dos mil veintidós. DOY FE